

"Ellos no sufren, están acostumbrados", dice una señora a su hijo en un colectivo que atraviesa Huancavelica.

Confrontarse con el informe de la CVR implicará admitir que frente al sufrimiento de muchos compatriotas, muchas veces somos nosotros quienes nos hemos acostumbrado.

¿Iman ruwana kashan?*

Wilfredo Ardito Vega

Quizá sea difícil de creer cómo vivíamos hace diez u once años, entre coches-bomba y paros armados, con toque de queda, luz y agua racionadas, especulando cuánto tardaría Sendero en apoderarse de Lima. Ante ese panorama sin esperanzas, fue lógico que tras la captura de Abimael Guzmán mucha gente pensara que era preferible olvidar el pasado y mirar hacia adelante. La sitiada capital se transformó rápidamente, a punta de centros comerciales, casinos y farmacias, y una especie de amnesia colectiva (y voluntaria) nos hacía referirnos a la "época del terrorismo" como si fuera un episodio remoto.

Ahora, el informe de la CVR, con fotos, testimonios y datos que habíamos olvidado, nos hace preguntarnos: ¿qué país tan sanguinario y cruel pudo producir dichos crímenes?

¿Un asunto ideológico?

Era fácil atribuirlo todo a una ideología fanática. Pero los

militares también cometían las mismas acciones sangrientas e indiscriminadas... y el informe sostiene que no eran excesos aislados, sino una política deliberada. ¿Por qué ambas facciones asumieron conscientemente que la vida de millares de inocentes podía subordinarse a sus fines?

A diferencia de Argentina, Chile o Uruguay, en muchas víctimas era difícil encontrar una posición ideológica. Para los senderistas, se justificaban las masacres de los campesinos más tradicionales, cuyos patrones culturales les impedían aceptar las regulaciones del "nuevo sistema". Para los militares, que ni siquiera entendían dos palabras de quechua, era imposible ver al campesino como un semejante; por eso se comportaron con el salvajismo de un ejército de ocupación. En ambos casos se consideraba que eran vidas prescindibles, y se buscaba dominar mediante el terror a los sobrevivientes.

Por eso, la experiencia del Perú es más bien semejante a la de decenas de aldeas guatemaltecas arrasadas en esos mismos años. Como en Guatemala, la raza, el idioma, el lugar donde habitaban las víctimas, era lo determinante. La particularidad es que en el Perú los ataques venían de bandos opuestos, lo cual hacía casi imposible sobrevivir.

El resto del país podía enterarse de los sucesos por las páginas interiores de los periódicos, por algún reportaje de televisión o hasta en el cine, pero básicamente seguía su vida con bastante normalidad... y quizá habría continuado así si la violencia se hubiera mantenido solamente en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. En tiempos de Belaunde se produjeron más desapariciones que durante el régimen de Pinochet,

Wilfredo Ardito es responsable del Área de Jueces de Paz del IDL.

* ¿Qué hacemos ahora?



Foto: Diario La República

pero el año pasado el arquitecto fue enterrado como un patriarca de la democracia.

En muchos lugares, una vez que el conflicto armado concluyó, el genocidio continuó bajo otra modalidad: las brigadas del Ministerio de Salud esterilizaron a millares de las mujeres sobrevivientes, buscando cumplir cuotas y ganar un premio a la posta médica más "eficiente". Los médicos y las enfermeras involucrados siguen en sus puestos y a nadie le parece necesario sancionarlos.

Cuestión de piel

Al parecer, matar, esterilizar o torturar es malo, pero cuando la víctima es india, indígena, chola, andina o campesina, como queramos decirle, es menos malo y hasta excusable. Y esta es una de las conclusiones más perturbadoras del informe de la CVR: el carácter racista de

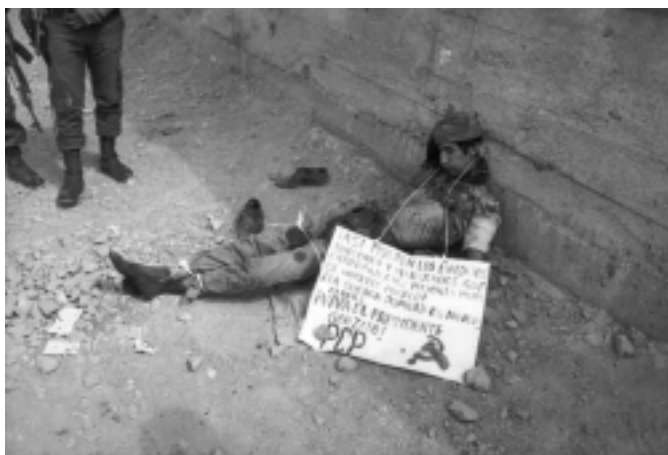
las muertes del pasado y de la indiferencia del presente. La trágica verdad es que existe en el Perú un sector social (básicamente los campesinos andinos, pero no solo ellos) cuyo sufrimiento es visto por los demás como un hecho "natural".

Para millones de peruanos, la dolorosa tarea consiste en admitir que también dentro de cada uno de nosotros existe parte de ese mismo racismo que impregnó a senderistas, militares y líderes políticos. Por eso, quizá muchas personas que se consideran buenas y sensibles deberían pedir perdón si lo que les estaba ocurriendo a sus compatriotas simplemente no les importaba y si todavía mantienen esa indiferencia frente a las demás desgracias que todavía padecen dichos sectores.

Muchas personas deberán aceptar que han disfrutado de

las ventajas de vivir en una sociedad injusta, donde simplemente el color de la piel garantiza ser respetado. En un país en el que la cercanía de compatriotas diferentes genera temor, amenaza o desconcierto, un proyecto de reconciliación nacional es urgente para que los peruanos aprendamos a vivir como un pueblo y no como un archipiélago de islas sin mayor conexión.

En otros países que afrontaron situaciones de violencia con caracteres étnicos, como Alemania y Sudáfrica, la educación posterior, a todos los niveles, fue fundamental, porque se comprendió que la ciudadanía estaba impregnada de prejuicios e intolerancia. En el Perú, esta es la mejor oportunidad para enfrentar los prejuicios étnicos: desde los insultos hasta la publicidad racista. Se trata de intentar aprender a comunicarse con el sector más



vulnerable, siquiera conociendo algunas palabras en su idioma. Lo ideal sería, claro, que para hablar quechua pudiéramos la mitad del empeño que pusimos respecto del inglés u otros idiomas extranjeros.

Esta tarea debe ser asumida por las propias entidades estatales. Por ejemplo, todavía es casi imposible que un postulante negro o andino ingrese a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea o la Marina. En el Ejército siguen las denuncias de reclutas andinos violados o asesinados por sus superiores. A algunos alumnos de la Escuela de Policía se les impedía hasta el año pasado acudir a ciertas fiestas o salir en fotos oficiales, porque su piel era demasiado oscura.

Se habla ahora, nuevamente, de reformar la administración de justicia, pero se mantiene en los magistrados y fiscales la percepción de que cholos o negros son más propensos a cometer delitos. De igual forma, en el caso que un agraviado tenga estas carac-

terísticas, se desestiman sus afirmaciones. Los rasgos físicos siguen haciendo a muchas personas más vulnerables a la detención o la tortura por parte de la Policía, como ha ocurrido con un grupo de ronderos de Piura en estos mismos días.

Una justicia igual para todos

Por ello es tan importante que los casos que ha recogido la CVR sean sancionados por la justicia. ¿Serán el Poder Judicial o el Ministerio Público capaces de intervenir realmente en los casos en que las víctimas son campesinos? ¿O simplemente la vida de los campesinos es un valor secundario para algunas instituciones? La forma en que se ha manejado este año el tema de la elección de los jueces de paz reflejaría que al menos el acceso de los más pobres a la justicia es un tema irrelevante para algunos funcionarios limeños.

Otro ejemplo actual es el caso de Edy Quilca Cruz, el estudiante puneño asesinado

el 29 de mayo durante una manifestación. El Ministerio de Defensa está pagando 170.000 nuevos soles a los abogados de los militares involucrados, para asegurar que el caso se vea en el fuero militar. Habría sido más decente y más humano permitir que continúe el proceso civil, con los abogados de planta del Ejército y, si se contaba con tanto dinero, indemnizar a la familia del estudiante y pagar el tratamiento de los heridos de aquel fatídico día, tanto en Puno cuanto en otros lugares. ¿Acaso habría semejante insensibilidad si los hechos se hubieran producido en una universidad particular limeña? ¿Estarían los heridos tan olvidados como ahora se encuentran? (En los hospitales Loayza, Carrión y Santo Toribio, por si alguien desea visitarlos.) ¿No habría más bien disculpas a las víctimas y promesas de sanción a los responsables?

Sin embargo, quizá sea simbólico que este mismo año el monumento de Pizarro haya sido removido de la Plaza de Armas. Haber cubierto de gloria una empresa de pillaje y genocidio es muy similar a lo que algunos sectores buscaron hacer con el conflicto armado, ocultando los detalles más sórdidos. Corresponde, por lo tanto, identificar cuáles son los rezagos del legado de Pizarro que tenemos en cada uno de nosotros y enfrentarlos, si queremos vivir en un Perú reconciliado. ▲